

Experto en seguridad

Pablo Urquizar: “No hay dos opiniones: no a los migrantes ilegales”



JAVIER TORRES/ATON

Claudia del Solar

Desde 2017, los últimos tres años son los con más homicidios en Chile, y entre 2022 y el 2023 los secuestros aumentaron un 69%. Hay diez organizaciones criminales transnacionales operando en Chile, entre ellas el Tren de Aragua, y diez organizaciones radicalizadas en la macrozona sur. Ese es parte del diagnóstico que la campaña de Evelyn Matthei ha hecho de la actual crisis de seguridad que vive el país, relatada por el abogado, Master en Derecho por las universidades Católica de Chile y Complutense de Madrid y académico de la Universidad Nacional Andrés Bello, Pablo Urquizar.

El excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur es hoy uno de los más cercanos colaboradores de la abanderada presidencial de la UDI y RN en materia de seguridad. En esa línea, asegura que la conclusión más evidente es que “lo que está ocurriendo en Chile con el crimen organizado no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional; las organi-

zaciones criminales buscan obtener la soberanía territorial a través del control, y en ese contexto estamos ante un ataque a la soberanía territorial. Y esta crisis está alimentada por un Estado ideológico e ineficiente, que no ha conducido políticamente la seguridad”.

Si se considera que esta es una crisis de seguridad nacional, también se entiende que requiere una estrategia en que se coordinen todos los estamentos del Estado, modernizar el sistema de inteligencia, reforzar Gendarmería y construir más cárceles y el control fronterizo. Esos serán los pilares de la propuesta de seguridad de la candidatura de Evelyn Matthei, acompañada de un ente coordinador que será parte de esta nueva arquitectura de seguridad creada para optimizar los recursos de todos los organismos del Estado involucrados en la seguridad.

“Existe mucha ineficiencia y mucha grasa en el Estado que se tiene que terminar”

—¿Usted cree que se ha hecho un diagnóstico equivocado de la crisis de seguridad

Uno de los coordinadores de la propuesta de seguridad de la candidatura de Matthei dice que: “el Estado ha sido contradictorio y equívoco, lo que ha tenido como consecuencia una ola migratoria nunca vista desde el retorno a la democracia”.

zaciones criminales buscan obtener la soberanía territorial a través del control, y en ese contexto estamos ante un ataque a la soberanía territorial. Y esta crisis está alimentada por un Estado ideológico e ineficiente, que no ha conducido políticamente la seguridad”.

Si se considera que esta es una crisis de seguridad nacional, también se entiende que requiere una estrategia en que se coordinen todos los estamentos del Estado, modernizar el sistema de inteligencia, reforzar Gendarmería y construir más cárceles y el control fronterizo. Esos serán los pilares de la propuesta de seguridad de la candidatura de Evelyn Matthei, acompañada de un ente coordinador que será parte de esta nueva arquitectura de seguridad creada para optimizar los recursos de todos los organismos del Estado involucrados en la seguridad.

“Existe mucha ineficiencia y mucha grasa en el Estado que se tiene que terminar”

—¿Usted cree que se ha hecho un diagnóstico equivocado de la crisis de seguridad

que vive el país?

—El Estado ha hecho un diagnóstico equivocado. Tenemos que cambiar la conceptualización a una de seguridad nacional, porque hoy Chile enfrenta una amenaza interna y externa a los derechos y libertades fundamentales de las personas dentro de nuestro territorio, que tiene que combatirse con todas las herramientas que tiene el Estado.

—¿Qué herramientas más allá del control policial, de las armas, la prevención?

—Lo primero es ver la experiencia internacional. Por ejemplo, la arquitectura de seguridad nacional que tiene España, el sistema de inteligencia de Inglaterra, la lucha contra las mafias que hizo Italia. En ese contexto hay cuatro pilares fundamentales para combatir el crimen organizado y el terrorismo y el primero es una estrategia de seguridad nacional.

—¿En qué se va a traducir esta estrategia de seguridad nacional?

—No podemos seguir con políticas aisladas, compartimentadas, las cuales hacen ineficaz la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Necesitamos una estrategia que

establezca objetivos claros, con indicadores, acciones y evaluación de resultados conforme a lo que se necesita para conseguir el objetivo. Eso se logra integrando las capacidades del Estado tanto en el ámbito interno como externo, es decir, ya no son solo las policías, sino todas las herramientas del Estado: qué funciones están cumpliendo las Fuerzas Armadas no solo en el contexto de los estados de excepción, cuál es el rol de Gendarmería desde el punto de vista de la inteligencia en las cárceles, la Policía Marítima, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Estado Mayor Conjunto, que une las inteligencias de las Fuerzas Armadas. Todas esas capacidades estratégicas el Estado hoy no las está usando de un modo eficiente conforme a un objetivo concreto, sino aisladamente, y esa falta de mirada global redundará en peores resultados a la hora de garantizar la seguridad nacional.

—¿Se necesita un ente superior o crear una instancia para coordinar todos estos recursos?

—La estrategia de seguridad nacional se basa en una arquitectura de seguridad nacional, es decir, con un ente que mire la problemática de la seguridad desde la perspectiva de la seguridad nacional globalmente e integre Fuerzas Armadas, policías, Gendarmería, Aduanas y todos los organismos involucrados desde alguna perspectiva en la seguridad.

—Esto implicaría modificar leyes en un Congreso que no se sabe cómo estará compuesto.

—Sí, hay avances legales en la experiencia comparada como la Ley 36/2015 española, que creó una estructura completa de seguridad nacional, y hay avances administrativos que se pueden analizar. Pero todo eso tiene que ver con la conducción política de la seguridad. Hoy vamos a tener a tres ministerios con funciones de seguridad: Seguridad Pública, Interior y Defensa, entonces vamos a tener una estructura compartimentada para enfrentar la seguridad nacional, cuestión que hace ineficiente esto, que necesita en realidad una estructura especial para integrarse, y eso se puede hacer administrativamente.

—De todos modos, se necesita un ente coordinador. ¿Se está pensando en el ministro de Seguridad Pública o en una entidad nueva?

—Aquí se necesita una mirada integral y eso no lo hace el ministro sectorial. Falta una figura que agrupe esa realidad compleja y esa figura se puede crear administrativamente, pero es indispensable que tenga un soporte legal. Hoy capacidades existen, pero no se están comunicando y no están siendo eficientes porque no tienen una coordinación, una estructura de seguridad nacional ni una conducción política que establezca los objetivos claros para hacer eficientes las distintas políticas que existen en la materia.

—Todas estas entidades además dependen de ministerios distintos: Defensa, Justicia, Interior. ¿El coordinador será más que un ministro?

—El Ministerio de Seguridad Pública,

para hacer su trabajo, necesita inteligencia, y ésta va a estar en el Ministerio del Interior. Entonces va a haber que corregir harto.

—A estas alturas la estrategia tiene 180 páginas y el costo es sideral. ¿O no?

—Soy un convencido de que existe mucha ineficiencia y mucha grasa en el Estado que se tiene que terminar. No se requieren recursos, sino un uso más eficiente y estratégico de ellos. Pero, además, la base de todos estos cambios es un acuerdo político grande.

“En Inteligencia necesitamos más capacidades, más tecnología”

—Es casi un lugar común señalar que las policías necesitan mejorar su inteligencia. ¿Eso está incluido?

—Otra línea de acción es modernizar el sistema de inteligencia, porque sin inteligencia las policías y las Fuerzas Armadas operan a ciegas. Nuestro sistema de inteligencia no se ha modificado en 20 años, los mismos en que ha avanzado el crimen organizado y el terrorismo. Necesitamos más capacidades, más tecnología, más instrumentos de planificación y una nueva ley, porque el proyecto que moderniza ese sistema lo envió el presidente Sebastián Piñera y lleva más de dos mil 200 días tramitándose.

—Sobre las Fuerzas Armadas, ¿se está pensando en darles funciones de seguridad pública?

—Las Fuerzas Armadas tienen cinco áreas de misión: defensa de la soberanía e integridad territorial, cooperación internacional y operaciones de paz, seguridad e intereses territoriales, protección en emergencias civiles y desastres naturales y la contribución al desarrollo del Estado. Esas áreas de misión se tienen que integrar en una estrategia de seguridad nacional. Sobre la seguridad pública, su rol debe ser estratégico y lo que uno debe preguntarse es cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas más idóneas para alcanzar esos objetivos.

—¿Se construirán o segregarán mejor las cárceles?

—Otro pilar es reforzar y fortalecer las cárceles y Gendarmería. Hoy las cárceles, si se dan las condiciones, son incubadoras del crimen organizado. Lamentablemente, hoy hay un doble control en los penales: un control formal del Estado, que dice que los tiene controlados, y el control material, que lo tiene el crimen organizado. En 2024 fueron asesinadas 47 personas en las cárceles que se supone que controla el Estado; hay más de 59 mil presos y una sobrepoblación del 137%, tenemos contagio criminógeno y escasez de cárceles. Es decir, todos los elementos para que empiece a crecer el crimen organizado en las cárceles. Eso sin tener en cuenta la corrupción que puede afectar, que es un aliado perfecto del crimen organizado.

—¿Cárceles a la italiana, con comunicaciones y movilidad restringida para los jefes del crimen organizado?

—Nosotros hemos proyectado que unas mil 600 personas deberían estar en una cárcel de este tipo, entonces acá hay que construir cárceles. También se necesitan cambios



Lo que está ocurriendo en Chile con el crimen organizado no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional”.



En migraciones el Estado no ha sido claro y eso ha sido aprovechado por el crimen organizado”.

legales porque en el modelo italiano a ciertas personas se les somete a un régimen más estricto y se restringen los beneficios que tiene todo reo.

—¿Hay medidas de prevención?

—Dentro de la estrategia de seguridad nacional un eje es eliminar los condicionamientos sociales del crimen organizado. Por ejemplo, cada vez más los niños y adolescentes están siendo reclutados por el crimen organizado. Entonces tres elementos básicos: una preocupación especial para que los hijos de quienes hoy están en la cárcel no sigan la trayectoria de sus padres, atacar la deserción escolar porque hoy hay 50 mil niños que están fuera del sistema escolar, y una protección especial para los niños con problemas de salud mental. Pero, de nuevo, todo eso está anclado en una estrategia de seguridad nacional.

“La migración clandestina es un problema de seguridad nacional”

—Uno de los grandes problemas es el control fronterizo. ¿Qué propuesta hay en esa materia?

—Una cuarta línea de acción es el control de las fronteras y el freno a la inmigración ilegal. La migración clandestina es también un problema de seguridad nacional porque los migrantes clandestinos son utilizados por el crimen organizado para materializar delitos y ejercer control territorial. Entonces se le combate con infraestructura física, inteligencia, presencia del Estado y dar señales correctas para que las personas sean incentivadas para ingresar regularmente. En esto el Estado ha sido contradictorio y equivocado, lo que ha tenido como consecuencia una ola migratoria nunca vista desde el retorno a la democracia.

—Pero cuando Evelyn Matthei habló de esto lo que quedó fue muro, zanja y campos minados.

—En migración no hay una bala de plata. Hay que mirar las mejores experiencias comparadas y materializarlas acorde a los problemas que tiene el país. Y el principal problema es la confusión completa del Estado en si queremos regularizar a los migrantes clandestinos o queremos detenerlos. La pregunta es si el Estado va a recibir a los migrantes clandestinos. Y en esa simple respuesta el Estado no ha sido claro y eso ha sido aprovechado por el crimen organizado para la trata de personas y el tráfico de migrantes. Eso no tiene que ver con la infraestructura, las zanjas o el muro, sino con una política clara migratoria de parte del país. En el programa de gobierno que se está discutiendo no hay dos opiniones: no a los migrantes ilegales.

—¿A qué se debe la propuesta de Evelyn Matthei de minar la frontera? ¿Un exceso de entusiasmo?

—Nosotros firmamos la Convención de Ottawa, que establece el desminado especialmente de la Macrozona Norte. Por lo tanto, no es posible comprender desde la perspectiva constitucional, internacional y de la dignidad humana el uso de minas antipersonales, sino que debemos tener todas las capacidades para frenar el crimen organizado transnacional y la migración ilegal.